

Argentina

ATILIO A. BORON

A LA HORA DE IDENTIFICAR los principales cambios realizados por los nuevos gobiernos en América Latina, la primera reacción sería afirmar que ha habido algunos cambios, pero ciertamente muchos menos de los que se esperaban. Por supuesto que el panorama varía de país en país. Daré una visión panorámica para mostrar que en realidad lo que más ha cambiado en América Latina ha sido la retórica.

Hubo un cambio en el discurso ideológico que tiene que ver con el hecho de que el neoliberalismo, de alguna manera, ha encontrado cierto límite a su capacidad hegemónica de crear un consenso favorable en las sociedades latinoamericanas. Recordemos simplemente que, en la década del noventa, se ganaban elecciones apelando al neoliberalismo. Las ganó Alberto Fujimori en Perú, Carlos Menem en Argentina; las ganaron en Uruguay y también en México.

El dato novedoso es que, en estos últimos años, para ganar las elecciones hubo que hacer una crítica retórica muy fuerte –verbal, por lo menos– *en contra* del neoliberalismo. Y éste es un elemento importante que nosotros –tal vez más interesados en el análisis de lo económico-social– haríamos muy mal en descuidar. Este componente ideológico es muy significativo, porque nos indica que las sociedades latinoamericanas están esperando otra cosa, eligen gobiernos con un mandato para hacer otras cosas. El problema es que los cambios han sido pocos. El tránsito desde ese mandato popular para cambiar el rumbo a las políticas concretas que lo hagan efectivo ha sido muy difícil de realizar.

La experiencia paradigmática para nosotros, los científicos sociales, es la brasileña, porque si hay un país que reúne todas las condiciones para hacer posible el tránsito del neoliberalismo al posneoliberalismo, ese país es Brasil. Brasil no corre el riesgo –ni en la más demencial aventura de la Casa Blanca– de que se decreta un embargo o un bloqueo en su contra, como se hizo con Cuba. Es un país que tiene una gravitación internacional impresionante, un mercado interno de 190 millones de habitantes, 8.5 millones de km² y un sector industrial poderosísimo, que en algunas ramas de punta compite con los países más desarrollados. Pensemos, simplemente, en la aviación comercial de nivel medio de Brasil, que vende aviones como los *Bandeirantes*, que desplazan a aviones holandeses, cana-

dienses y norteamericanos en licitaciones internacionales. Esto significa que Brasil es un país con una fuerza enorme. Y, sin embargo, si hubo algún cambio en ese país, ese cambio consistió, justamente, en la acentuación de las tendencias neoliberales del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Esto no es un descubrimiento mío, sino que lo declaran los movimientos sociales en Brasil y un sector muy importante del Partido de los Trabajadores (PT); también lo afirman João Pedro Stédile en el Movimiento de los Sin Tierra (MST), algunos intelectuales como Emir Sader y muchos otros. Con Lula se han acentuado las tendencias que se venían implementando con anterioridad.

Esto tampoco es novedoso en el panorama latinoamericano. Pensemos en la experiencia argentina: cuando triunfa la Alianza con Fernando De la Rúa, el mandato popular anhelaba un cambio de rumbo. Esa fue la forma en que se presentó la Alianza: como una alternativa al menemismo. Y, sin embargo, lo que la Alianza hizo en esa breve gestión de dos años de gobierno fue profundizar el rumbo neoliberal que venía siendo impulsado por el gobierno de Menem en la década anterior; incluso a través de la imposición de una reforma tributaria profundamente regresiva, que afectó considerablemente a los sectores medios de la sociedad argentina. Algo muy similar a lo que se produciría luego en Brasil en torno a la discusión sobre la seguridad social y su reforma.

Entonces, tal como anticipé en un principio, a la hora de evaluar estos cambios constatamos que lo que ha habido en América Latina es un cambio en la retórica. Este cambio tal vez haya sido más notorio en Argentina, puesto que es un país dado a los excesos: exceso de neoliberalismo, exceso de populismo, etcétera.

Argentina fue más neoliberal que ningún otro país, aplicó la política del Consenso de Washington como ningún otro en América Latina. Un país más pequeño como Bolivia logró defender su empresa estatal de petróleo. Argentina, en cambio, gracias a Carlos Menem y al peronismo gobernante en ese momento –al cual el actual presidente no era del todo ajeno: es oportuno recordar que era gobernador de una de las provincias más importantes–, privatizó absolutamente todo, incluyendo la compañía de petróleo YPF, SEGBA, etcétera. Ni siquiera Vicente Fox, que se define a sí mismo como un empresario que gobierna y define a su gobierno como un gobierno de los empresarios, se atrevió a hacer lo mismo en México. En Argentina esa política de aplicación de las medidas neoliberales se llevó al extremo.

Lo que quiero marcar es que, a pesar de los mandatos populares, en América Latina esa tendencia continúa. Cuando uno analiza los discursos del presidente Néstor Kirchner, tiene la sensación de que está en Venezuela. Si uno leyera los discursos sin saber de quiénes son, no sabría si quien habla es Hugo Chávez o el propio Kirchner.

Hay en ellos una crítica muy fuerte al neoliberalismo, al imperialismo, al colonialismo, al Fondo Monetario Internacional (FMI), a los empresarios; hay incluso algunos gestos muy impresionantes como, por ejemplo, la reunión de Kirchner en Francia con los empresarios franceses, en la que realizó unos desplantes muy marcados hacia la clase empresaria, hacia lo que podríamos llamar el capitalismo internacional.

Pero la pregunta que sigue es: ¿qué reflejo tiene esto en la gestión económica, en el día a día de la práctica concreta del Ministro de Economía, Roberto Lavagna? Y, lamentablemente, constatamos que hay un abismo que separa el discurso del presidente de la práctica concreta que lleva a cabo el Ministro de Economía, que sigue dentro de los carriles del Consenso de Washington. Hay una sola gran excepción –importante para equilibrar este análisis–, que fue la negociación por la quita de los bonos de la deuda externa, único punto en que se produjo una salida significativa respecto de los grandes lineamientos del Consenso de Washington.

En el resto de los casos, la política se articula prácticamente en la misma dirección. Un claro ejemplo está dado por las declaraciones del Ministro Lavagna en las que afirmó que un pequeño aumento concedido al personal encargado de edificios de propiedad horizontal, al igual que el incremento otorgado a los jubilados (de 20, 25 pesos), tendrían un impacto inflacionario. Esto nos habla de la continuidad de un modelo de gestión que ve en el salario la fuente de los problemas, y que deja totalmente de lado la reconstrucción del mercado interno.

Por otro lado, existe la amenaza del agotamiento del experimento petista en Brasil, con el fracaso del gobierno de Lula. No se debe extender prematuramente un certificado de defunción, a pesar de que João Pedro Stédile expresó que el gobierno de Lula ya se acabó. Quisiera mantener una puerta abierta, pensar que es posible una rectificación, aunque las chances de que esto ocurra son bajísimas. Obviamente, si no se modifica radicalmente el rumbo, la mayor economía de América Latina –y una de las mayores del Tercer Mundo– se encamina hacia un fracaso rotundo que, sin ninguna duda, va a ejercer un efecto depresivo y regresivo sobre todos los países de la región. El fracaso del experimento de Lula en Brasil tendría un impacto demoledor sobre todos los países de la región, empezando por Argentina y Uruguay, con efectos que se harían sentir hasta en México. Esto es lo que hoy está en discusión. Por ello las perspectivas son bastante poco alentadoras.

ABRAHAM L. GAK

COMPARTO la importancia dada al discurso que no se acostumbra a tener en cuenta habitualmente. Es importante porque permite ubicarse a la gente que lo lee o escucha y responde muchas veces a sus requerimientos.

En el caso de Argentina, la Alianza no presentaba una expectativa de cambio, planteaba sí una mayor transparencia, una mayor honestidad y la erradicación del delito en la función pública.

Pero, básicamente, quiso respaldar la convertibilidad sosteniendo que la iba a mantener a toda costa, lo mismo que el pago de la deuda externa. En ningún momento de la campaña electoral, en ninguno de sus documentos, se planteaban cambios en estos aspectos.

De modo que la Alianza se presentaba claramente como una continuación del modelo preexistente; más prolijo, más honesto, pero –en definitiva– no cambiaba radicalmente las cosas.

El gobierno de Kirchner viene a ser casi un milagro. No creo exagerar cuando afirmo que en Argentina la aparición de Néstor Kirchner es casi un milagro. Porque si pensamos que podría haber sido presidente Menem o Rodríguez Saá, De la Sota, o Reutemann, lo mejor que podía ocurrir era esto.

Si lo que está ocurriendo es suficientemente bueno es otro tema. El gobierno de Kirchner, si uno analiza su discurso de asunción como Presidente, manifestaba algunas definiciones políticas importantes:

- recuperación de la soberanía y toma de decisión propia del Estado,
- recuperación de las funciones del Estado,
- necesidad de incorporarse al ámbito internacional sin ceder objetivos fundamentales: el crecimiento, el desarrollo y la distribución del ingreso.

De modo que desde el punto de vista del discurso uno podría afirmar: “Bueno, estamos frente a un gobierno *razonablemente* progresista”. Pero la realidad se presenta con algunos signos muy diferentes.

Por un lado, el Ministro Roberto Lavagna, que no parecería ser un ministro que quiera modificar la estructura del modelo, presenta, sin embargo, algunos logros significativos. Uno de ellos, indudablemente, es la renegociación de la deuda que significó una quita muy significativa en la deuda privada.

Lavagna heredó algunas situaciones que no son producto de su gestión. Durante la gestión del anterior ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov se dispuso una devaluación asimétrica, que llevó la moneda de 1 a 1.40 y significó una emisión de bonos a favor del sistema bancario que incrementó la deuda pública en forma sig-

nificativa; en segundo lugar, la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de pasar a una flotación sucia, que llevó al dólar a casi 4 pesos y originó una debacle que cayó fundamentalmente sobre los sectores más empobrecidos de Argentina y en tercer lugar, permitió que grandes empresas licuaran sus pasivos.

De todos modos esto colocó a Argentina en una situación muy particular. Una devaluación del 300% originó un acomodamiento del precio relativo de no más del 70-80%, de forma tal que se generó una cierta competitividad que permitió recuperarse bastante sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, para iniciar un proceso de sustitución de importaciones, que generó a su vez un muy limitado crecimiento de empleo, aunque principalmente dirigido a un empleo no formalizado, un empleo “en negro”.

Se estableció un régimen de retenciones fijo. Nosotros originalmente no estuvimos de acuerdo con eso, sosteníamos que tenía que ser móvil, de modo que a medida que las condiciones de competitividad mejoraran para los sectores exportadores, la recaudación del Estado fuera mayor. De todos modos, la retención fue significativa –si bien claramente el gobierno tiene algún acuerdo con los sectores petroleros, porque no solamente no fueron afectados sino que fueron beneficiados–, y esas retenciones fueron sumamente importantes para evitar que se generara un incremento de los costos de vida más allá de los que ya se habían establecido.

Pero, igualmente, mantener en regla las variables macroeconómicas, tener superávit fiscal, tener las cuentas externas con un superávit importante, en un primer momento la instalación de un control de cambios razonablemente estricto –aunque nosotros sosteníamos que se tendría que haber dado un paso más allá– que se fue liberando poco a poco, hasta ahora que hay muy pocas limitaciones reales a los movimientos de capital, fue importante.

De modo que no pongo en la balanza la actitud del Ministro Lavagna como negativa. El empleo ha mejorado, aunque su calidad no es buena aún; no obstante hay sectores que sí han tenido un acomodamiento mejor; el sector público está condenado y en definitiva todavía los sectores asalariados están visiblemente retrasados respecto de su participación en el producto bruto, que tradicionalmente en Argentina fue mucho más equitativo de lo que es ahora. Habrá que ver cómo sigue este proceso.

El ministro ha insistido permanentemente en que la presión salarial iba a generar inflación y fue produciendo un estado de ánimo en el que se instalaba la idea de que los reclamos salariales eran los causantes de la inflación.

Nosotros sostenemos que eso es falso; lo que pasa es que no se ha hecho ningún esfuerzo serio para modificar la distribución del ingreso. Es evidente que la intencionalidad del sector empresario es no ceder nada de sus ganancias, que son excelentes. En general

todo el sector empresarial ha mejorado enormemente su rentabilidad. Ha habido una circunstancia extraordinaria y es que los sectores de pequeñas y medianas empresas que no tenían acceso al crédito han hecho todo sin crédito, con los recursos propios y el manejo de caja.

El gobierno ha lanzado planes especiales de crédito para pequeñas y medianas empresas con tasas de interés muy convenientes pero, lamentablemente, los empresarios estaban –muchos aún lo están– prácticamente fundidos y no pueden ofrecer las garantías elementales a los bancos, con lo cual el crédito existe pero no pueden acceder a él. El gobierno aún no ha hecho absolutamente nada para mejorar esas posibilidades, la corrección de cómo calcular la rentabilidad de las garantías de una empresa o generar fondos fiduciarios o sistemas de garantía recíproca que permita a entidades que no tienen patrimonio acceder a créditos presentando planes de producción que sean viables no se ha realizado.

Todo esto no muestra que la situación haya mejorado sensiblemente. No lo presento como una continuidad lisa y llana de los gobiernos anteriores, pero no ha habido una intencionalidad real de cambio profundo de las relaciones de poder en Argentina. Los sectores empresariales siguen ejerciendo el poder; el gobierno claramente no ha querido combatir contra ellos. Todos sabemos que una reforma tributaria –imprescindible para producir un cambio en la distribución del ingreso– nunca es pacífica, siempre es conflictiva, y el gobierno no ha ido tras eso. Está iniciando una campaña importante para reducir el empleo “en negro”, incluso está anunciando la incorporación de 200.000 agentes que van a inspeccionar para incorporar el personal a las planillas de trabajo, pero es evidente también que eso es una medida de relativo valor, porque todavía los salarios siguen siendo bajos. Todavía los sectores empresariales gozan de muchas franquicias e incluso algunas áreas, por ejemplo el petróleo, tienen privilegios inaceptables porque a pesar del gran incremento que ha tenido el precio del petróleo no tienen que aumentar las regalías ni una décima de porcentaje, de modo que realmente ya no sólo es plantear en términos conceptuales a quién pertenece esa renta no renovable de Argentina, sino que ni siquiera se ha mejorado la participación en esa renta.

CLAUDIO LOZANO

ES IMPORTANTE UBICAR EL MOMENTO ACTUAL de Argentina en el marco de la crisis de hegemonía de las clases dominantes que se establece a partir del 2001. Crisis cuyos contenidos tienen que ver con una agravada y larga decadencia social, cuyo rasgo dominante es la ruptura del patrón básico de organización de la sociedad, el deterioro brutal de sus sectores medios –los que tienden a constituir la trama dominante de la nueva pobreza–; el colapso del esquema económico –básicamente del régimen de convertibilidad, que se produce dado el sobreendeudamiento del sector público argentino y la ausencia de definiciones en términos de financiamiento por parte de la economía mundial–; y una profunda crisis de representación política.

Esa crisis de hegemonía, con estos tres contenidos, tenía una dinámica de fractura al interior de la cúpula dominante, donde ciertos sectores empresariales apostaban al mantenimiento y profundización del régimen de convertibilidad, incluso con planteos cercanos a la estrategia de dolarización, mientras que otros estaban a favor de la salida devaluacionista.

Esta dinámica era acompañada por un cuadro de movilización social ascendente muy significativo, asentado en organizaciones que habían nacido y se habían desarrollado por fuera del sistema político tradicional. Con esto último me refiero tanto al sistema político partidario como a las estructuras sociales de contención propias del régimen vigente.

La crisis de hegemonía convive con una situación muy puntual y concreta: hay una ausencia explícita de dirección consciente por parte de los sectores populares. No se había configurado una alternativa política que permitiera transformar ese cuadro de movilización en una estrategia institucional con capacidad de hacerse cargo de la etapa que se abría. Como consecuencia se abre un proceso de resolución de la crisis, que va a tener distintas etapas.

Una primera etapa, represiva, que comienza el 19 y 20 de diciembre de 2001 –con represión concreta sobre el movimiento popular, con amenazas sobre partes sustantivas de las organizaciones que habían sido soporte de ese proceso– y que se desarrolla incluso durante parte del año 2002.

En segundo lugar se produce la salida devaluacionista de la convertibilidad, con costos brutales para los sectores populares: el impacto en precios que esto supuso arrojó cinco millones de personas por debajo de la línea de pobreza en apenas cinco meses.

En tercer lugar se pone en marcha un plan de contención social que intenta cooptar lo que había sido la experiencia popular, que estableció una suma de 150 pesos (50 dólares) para cada jefe y jefa de hogar desocupado. El plan llegó a tener dos millones doscientos mil beneficiarios. Se debe considerar que cuando cae el Gobier-

no de De la Rúa, los planes sociales para los desempleados no eran más de doscientos mil. O sea que se pusieron en marcha dos millones de planes. Obviamente la magnitud de esta red se explica por el grado de cuestionamiento social previo.

A pesar de todo lo anterior, el intento de legitimación en la continuidad del sistema político tradicional no pudo ser sostenido. La propia movilización social prácticamente le puso límites al gobierno de Duhalde que debe retirarse, al igual que algunas de las figuras más notorias del *establishment* político argentino que emergían como alternativa de recambio y que, por diferentes razones, fueron desplazadas.

La emergencia de Kirchner en la presidencia, en el marco de la crisis más profunda del sistema político tradicional, supone la aparición de alguien prácticamente desconocido, que si bien formaba parte de la estructura del justicialismo estaba lo suficientemente alejado del firmamento político electoral del país como para que se conociera de quién se trataba.

En términos económicos, el proceso de devaluación supone, en primer lugar, la profundización de la recesión que venía desde 1998 hasta mediados del 2002; a partir de allí se produce un proceso de recomposición de la actividad económica, a tasas aceleradas que permitió alcanzar recién en 2005 los niveles del año 1998, que son los mismos niveles de producto por habitante del año 1974. En los últimos treinta años hubo un proceso de oscilaciones cíclicas, pero siempre en el marco del estancamiento estructural.

El nivel de actividad es similar al año 1998 pero sobre la base de un esquema de negocios diferente, porque la devaluación supone un espacio distinto de realización de ganancias: pierden importancia los sectores más ligados al campo financiero y de servicios –que habían tenido un papel protagónico en el marco de la convertibilidad–, y ganan relevancia los sectores vinculados a la salida exportadora y los oligopolios más vinculados al abastecimiento del mercado interno doméstico.

Ese esquema de negocios se sostiene en un cuadro social peor que el que existía en 1998. La tasa de desempleo es más alta y los ingresos son inferiores a los que teníamos en ese año. Hay cinco millones de personas más en situación de pobreza que las que teníamos en aquel momento.

Al mismo tiempo hay un ajuste fiscal respecto a 1998, el superávit que hoy tenemos es predominantemente reducción de gastos en moneda constante.

Para expresarlo de manera muy concreta: la lógica económica que se asienta luego de la devaluación es la de un régimen donde se obtiene el mismo nivel de riqueza, sobre la base de un mayor nivel de explotación de la fuerza de trabajo y una mayor pauperización de la sociedad.

Los impactos que el neoliberalismo ha tenido sobre Argentina se pueden sintetizar en tres puntos: estancamiento estructural, fuerte proceso de desindustrialización y, pauperización de la sociedad (en los últimos treinta años la población creció en quince millones igual que lo que creció el número de pobres).

Una de las consecuencias de la experiencia neoliberal en Argentina es el proceso de concentración de los medios de producción. Se ha decretado una suerte de monopolio absoluto de la tasa de inversión por parte de sus agentes dominantes. Esto determina una capacidad muy alta de condicionamiento sobre el futuro.

Otra consecuencia son las condiciones de disciplinamiento de la fuerza laboral vinculadas a una alta tasa de desempleo y a una fuerte precariedad que involucra prácticamente a la mitad del empleo, lo que supone límites precisos para una evolución ascendente del salario que acompañe la evolución del producto. Por lo general, el salario crece por debajo de lo que crece el producto, con lo que, en realidad, se agudiza la desigualdad.

En términos fiscales, el proceso ha permitido un grado importante de captura del financiamiento público y de la asignación del gasto por parte de los sectores más fuertes. El monopolio de la tasa de inversión viene asociado a la capacidad que tienen estos actores de demandar sistemáticamente apoyo fiscal para la inversión.

En cuarto lugar, el otro elemento condicionante es la tendencia sistemática y permanente a la fuga de capitales que actúa como veto para la modificación de cualquier esquema de política económica.

Estos serían los cuatro puntos que aparecen como problemas en discusión para una estrategia alternativa.

El problema principal derivado de la experiencia neoliberal es que Argentina se ha transformado en una economía donde muy pocas empresas realizan ganancias extraordinarias en muy pocos sectores. La consecuencia de esto es doble. Por un lado, tiene un impacto en términos de distribución desigual porque indudablemente sus ganancias son diferenciales respecto del resto del sector empresarial y respecto del resto de la sociedad; por otro, tiene un impacto sobre la tasa de inversión porque a través de su poder de mercado pueden realizar las ganancias y no necesitan invertir de manera significativa para mantenerla, a la vez que no les es conveniente invertir en otros sectores con menor rentabilidad. Consecuentemente hay una tendencia a declinar la tasa de inversión, por eso a pesar de que tenemos el mismo nivel de actividad económica del año 1998, la tasa de inversión es menor. Por lo tanto, sin discutir este problema –que es el problema del capitalismo argentino–, la secuela de la crisis, más allá de la recuperación de la actividad, es la dificultad para sostener el proceso de crecimiento y plantear alternativas serias.

En términos políticos, el gobierno de Kirchner emerge en el marco de un cuadro de movilización social y de cuestionamiento al sistema político tradicional. En ese sentido se opera prácticamente una clausura del discurso neoliberal. Hay una derrota político-ideológica del neoliberalismo que no es menor en términos sociales.

Este panorama permitió que Kirchner, en el momento inaugural del gobierno, estableciera un conjunto de definiciones muy significativas modificando la estrategia política hacia determinados ámbitos institucionales, tales como justicia y derechos humanos. A la vez realizó un conjunto de planteos en materia de política económica –que incluso estaban en contradicción con algunas de las definiciones que se habían tomado en el proceso de reorganización económica del gobierno de Duhalde– tales como el cuestionamiento a los acuerdos con el FMI, instalar la idea de la corresponsabilidad de los organismos multilaterales de crédito como un eje de la discusión con esos organismos, ponerle límites a las empresas privatizadas e, incluso, algunas definiciones en términos de re-estatización de empresas públicas.

El proceso vivido hace que este gobierno haya tenido una práctica política dirigida a concentrar poder en el ejecutivo, en la autoridad presidencial y a no potenciar el proceso de movilización social, sino a tratar de pedirle a la sociedad que le delegue la autoridad para resolver. En ese marco, la única propuesta del gobierno a las organizaciones populares o a las experiencias políticas que habían sido parte del proceso de movilización social es que se incorporen en su estrategia electoral. No es el tema de discutir un proyecto colectivo.

Para la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), como central de trabajadores, una prioridad es la libertad que deben recuperar los trabajadores para organizarse y el conjunto de políticas que permitan mejorar la distribución del ingreso. El gobierno, en cambio, nos propone la candidatura de nuestro Secretario General para gobernar la Provincia de Buenos Aires.

Hay cuatro decisiones que ha tomado este gobierno en los últimos tiempos que son preocupantes, ya que determinan el escenario futuro. Primero, se han renovado las licencias a los medios de comunicación, a los multimedios, hipotecando cualquier posibilidad de política de comunicación pública en Argentina. Se han renovado las licencias sin ningún tipo de limitación, de manera absolutamente inconstitucional, por la vía de un decreto y sin ninguna justificación a medios que construyen la agenda pública –obviamente no en el sentido de una profundización política de signo popular.

Segundo, en el nombre de la búsqueda de una burguesía nacional, que cada vez resulta más difícil de encontrar, se ha tendido a cerrar acuerdos con actores empresariales que tienen más que ver con el proceso de decadencia de Argentina, que con la construcción

de una perspectiva diferente. En ese acuerdo va de suyo primero la reversión del inicial proceso de cuestionamiento a las privatizaciones y la ratificación del proceso privatista, y segundo la renuncia a la estrategia de reforma impositiva. Son las dos cosas que nosotros vemos como preocupantes allí.

Tercero, la definición del Partido Justicialista como el instrumento electoral central. Partido absolutamente articulado en término de intereses y actores con buena parte del proceso reciente en nuestro país, y en donde la relación con las organizaciones populares se establece a partir de subordinar a la adhesión o no a este tipo de estrategias.

Cuarto, la prioridad establecida en la relación del gobierno con la Confederación General del Trabajo (CGT) y obviamente abandonar, por lo menos hasta el momento, toda estrategia de libertad sindical para que los trabajadores puedan organizarse. Esto viene de la mano de un conjunto de límites muy precisos, a cualquier política de distribución del ingreso que por lo menos fije un umbral de ingreso distinto al conjunto de la sociedad. No alcanzan hoy las políticas salariales para discutir distribución. Este gobierno no tiene ninguna vocación en esta dirección.

Así que esas cuatro cuestiones son las que para nosotros tienden a obturar el futuro. De manera muy sintética lo que visualizamos es un proceso donde la movilización social abrió espacios para un conjunto de intervenciones políticas que fueron realmente saludables en términos de definiciones institucionales, y al mismo tiempo la estrategia política adoptada en cuanto propone el retorno de la sociedad a su casa, en todo caso abre un esquema cada vez más cerrado, en donde el gobierno tiende a reposar su anclaje, su asentamiento y su perspectiva, en los factores de poder tradicional.